

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**  
**Medellín, veintisiete (27) de enero de dos mil veintiuno (2021)**

DEMANDANTE	: LUIS FERNANDO URIBE RÍOS
DEMANDADO :	: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-002-2019-00066-01
RADICADO INTERNO	: 140-20
DECISIÓN	: REVOCA PARCIALMENTE, ADICIONA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 007

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

De conformidad con el poder especial otorgado por la Dra. ANA BEATRIZ OCHOA MEJÍA (en calidad de representante legal de la sociedad PROTECCIÓN S.A.), a la Dra. GLADYS MARCELA ZULUAGA OCAMPO para representar los intereses de la sociedad mencionada. Por cumplirse los requisitos establecidos en los artículos 74 y 75 del CGP se le reconoce personería.

**ANTECEDENTES**

La parte demandante solicita se DECLARE la nulidad del traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual por vicios del consentimiento derivado esencialmente de la falta de información veraz, concreta y oportuna por parte de PROTECCIÓN S.A., acerca de las consecuencias perjudiciales que le ocasionaría dicho traslado; como consecuencia de lo anterior se declare que el accionante está y continúa vinculado al Régimen de Prima Media sin solución de continuidad, desde el 8 de julio de 1994. Se le ORDENE a la sociedad PROTECCIÓN S.A., a trasladar a Colpensiones, el saldo de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los bonos pensionales si hubiere lugar; que el traslado del capital sea indexado; y se impongan costas procesales a las accionadas.

Como supuestos facticos con que sustenta sus pretensiones, narra que nació el 22 de septiembre de 1958; se afilió inicialmente al Régimen de Prima Media desde que inicio actividad laboral el 9 de marzo de 1982, y cotizó hasta el 31 de mayo de 1989; a partir del 8 de julio de 1994 se trasladó al Régimen de

Ahorro Individual; que las administradoras de este régimen le ofrecían ventajas para obtener una pensión superior y segura; y la entidad omitió darle información veraz.

### SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 16 de octubre de 2020, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la ineficacia del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual, administrado por PROTECCIÓN S.A. Le ORDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a trasladar al actor a Colpensiones, y devolver todos los valores que hayan recibido con motivo de la afiliación, como las cotizaciones completas, bonos pensionales con todos sus frutos e intereses, ahorros voluntarios del art. 62 de la Ley 100 de 1993 con todos los rendimientos que se hubieren causado, con excepción únicamente de los dineros descontados por cuotas de administración de la cuenta de ahorro individual. Le ORDENÓ a Colpensiones, a reactivar las afiliaciones, a afiliarse al Régimen de Prima Media que administra, sin solución de continuidad, a recibir todos los dineros que le sean trasladados por la sociedad PROTECCIÓN, y a corregir la historia laboral. DECLARÓ PROBADA de oficio la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LOS DINEROS POR CONCEPTO DE CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS DE AHORRO INDIVIDUAL por parte de PROTECCIÓN S.A. Impuso costas a la sociedad Protección S.A., y exoneró de costas a Colpensiones

### IMPUGNACIÓN

Los apoderados de las sociedades accionadas apelaron la decisión de primera instancia, donde la **apoderada de la sociedad PROTECCIÓN S.A.** solicita se revoque la condena de devolver los aportes voluntarios invocando el art. 22 del Decreto 692 de 1994 y el Decreto 1833 de 2016, los cuales establecen la posibilidad de los afiliados del Régimen de Ahorro Individual para realizar aportes adicionales sobre el descuento obligatorio y que en caso de traslado de régimen se pueden conservar estos conceptos de la cuenta de ahorro individual y devolverse al afiliado; que si bien, la finalidad de estos aportes es mejorar la mesada pensional, se discute es la naturaleza del mismo frente a la facultad que tiene el afiliado de donarlo o no, pudiéndose perjudicar al afiliado; retoma el art. 7 del Decreto 3995 de 2008 en el que se señalan los conceptos que se trasladan, respetándose las cuotas de administración, seguro previsional y otros conceptos. Resalta que la naturaleza del Régimen de Ahorro Individual es de inversión y por eso es excluyente con el Régimen de Prima Media y en caso de trasladar estos aportes sería enriquecer sin justa causa a Colpensiones, porque el IBC por el cual el afiliado ha cotizado es el mismo en ambos regímenes. Y solicita que, en caso de confirmarse la decisión de primera instancia, se ratifique la decisión de no ordenar el traslado de cuotas de administración.

Y la **apoderada de Colpensiones** presenta inconformidad por no accederse a la devolución de las cuotas de administración, los aportes de Garantía de Pensión Mínima y seguros previsionales, argumentando que la consecuencia de la ineficacia del traslado es que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes del traslado, por lo que si el acto jurídico de afiliación nunca produjo efectos a la vida jurídica ello conlleva a determinar que se debe ordenar trasladar todos los aportes de la cuenta de ahorro individual, dentro de los cuales se deben incluir los conceptos enunciados. Y el traslado de las cuotas de administración opera en virtud de lo dispuesto en art 1746 del Código Civil y de no hacerse se generaría un detrimento patrimonial y va en contra del principio de estabilidad financiera.

### ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de PROTECCIÓN S.A. argumenta la improcedencia de la devolución de lo descontado para las primas del seguro previsional, teniendo en cuenta que la comisión de administración y la prima del seguro previsional son descuentos autorizados por el art. 20 de la Ley 100 de 1993, y el descuento del 3% se usa para cubrir los gastos de administración y para pagar la prima del seguro previsional, el cual opera en ambos regímenes; que en el plenario se allegó prueba de los rendimientos de la cuenta de ahorro individual del actor, lo que da cuenta que los mismos fueron debidamente administrados; con la orden de devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y adicionalmente lo descontado por comisión de administración, se estaría constituyendo en un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones, por recibir una comisión que no ha sido destinada a financiar la pensión de vejez de la parte demandante, y al ser trasladados los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, que corresponden a la buena gestión de PROTECCIÓN; teniendo en cuenta que la consecuencia de la ineficacia y/o nulidad de la afiliación es que las cosas vuelvan al estado anterior, en estricto sentido, PROTECCIÓN S.A. no debió administrar los recursos de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos que produjo dicha cuenta no se causaron y no existió el cobro de una comisión de administración, pero conforme a lo establecido en el art. 1746 del Código Civil que habla de las restituciones mutuas, intereses, frutos y del abono de mejoras, se debe entender que aunque se haga la ficción que nunca existió el contrato de afiliación, no se puede desconocer que el bien administrado produjo unos frutos y unas mejoras y rendimientos, siendo esa la razón por la que su representada tiene derecho a conservar la comisión de administración, y en caso de aplicarse en estricto sentido la teoría de la nulidad del derecho privado mediante la restitución completa de las prestaciones la conclusión sería que si la comisión nunca se debió haber descontado, tampoco debieron haber existido rendimientos en la cuenta de ahorro individual; y otra de las razones es con base en el Decreto 2555 de 2010 y el concepto del 17 de enero de 2020. Respecto a la prima del seguro previsionales, manifiesta que ésta ya fue girada a una aseguradora mes a mes, estando la accionada en imposibilidad de devolverla; resalta el pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y la sentencia SL 2324 de 2019, frente a los terceros de buena fe. En caso de confirmarse la condena de asumir con su propio patrimonio los valores de los descuentos permitidos por mandato legal para la comisión de administración y las primas de los seguros, se estaría en presencia de una condena en perjuicios contra el patrimonio de PROTECCIÓN lo que implica que se tiene que revisar a la luz de una responsabilidad civil con los elementos propios de esta, pero que no fue materia de prueba ni quedó demostrado la causación de los mismos; y finalmente invoca la prescripción frente al cobro del 3%.

### **PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO**

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en apelación: i) Si la sociedad PROTECCIÓN S.A. debe trasladar los gastos de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima; ii) Si hay lugar revocar la orden de trasladar los aportes voluntarios. Y en el grado de consulta, se deberá analizar: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si los gastos de administración y seguros previsionales se deben trasladar debidamente indexados; y iii) Si hay lugar a la devolución del bono pensional.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante no es beneficiario del régimen de transición por edad, porque a la vigencia de la L 100 de 1993 no tenía más de 40 años de edad al haber nacido el 22 de septiembre de 1958 (fls 35); que cotizó al ISS hoy Colpensiones desde el 15 de mayo de 1990 al 4 de noviembre de 1992 (fls.

39); solicitó traslado a la sociedad PROTECCIÓN S.A. y allí cotiza desde el 8 de julio de 1994 (fl. 42), y no es discusión que el demandante solicitó la ineficacia del traslado al RAIS, al haber invocado en los hechos de la demanda, la falta de información para poder definir con libertad su traslado.

Descendiendo al caso particular, se tiene que en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por el accionante, no se evidencia confesión alguna, al haber indicado al momento del traslado estaban con los comentarios que el ISS iba a desaparecer; la afiliación a PROTECCIÓN S.A. la hizo en la Alcaldía de Medellín cuando iba a trabajar con el Municipio, y en el mall de la Alcaldía de Medellín había unas casetas de Protección S.A. y Porvenir S.A. y ahí se afilió porque necesitaba el comprobante para firmar el contrato para laborar. Las personas que le afiliaron se basaron en la competencia entre los dos fondos que había, un fondo le decía que pagaba más que el otro, y esa fue la asesoría que tuvo; lo llamaron cuando cumplió los 40 años y le dieron una asesoría que fue muy poca y le dijeron cuanto iba a devengar y en esta asesoría no le explicaron que podía regresar; el asesor le dijo que frente a los aportes que tenía en el ISS, que ellos recogían el bono pensional que le iban a dar a él y le daban la autorización para ellos continuar; no le hablaron de los rendimientos de la cuenta de ahorro individual; no lo obligaron a trasladarse a PROTECCIÓN S.A. fue un acuerdo voluntario.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

### 1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”*, y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES.** Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los**

**intereses de los afiliados-** en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**". (Resalto fuera del texto)

**"OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES.** Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado." (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

*"...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...."*

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aun operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688, 1689, 4426 de 2019, y de forma más reciente las sentencias SL 2611, 2877 y 4811 de 2020, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCIÓN S.A. no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoreamiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la

información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PROTECCIÓN S.A. aporte el formulario de afiliación a COLMENA, historia laboral para iniciar el proceso de reclamación del bono pensional, reasesoría del año 2010, proyección de la pensión en el Régimen de Ahorro Individual, historia laboral, historial de vinculaciones, reporte del estado de cuenta, Concepto 2015123910-002 del 29 de diciembre de 2015, y los comunicados de prensa (fl. 127 a 160), lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración del traslado y la orden dada de trasladar a Colpensiones las cotizaciones completas con todos sus frutos e intereses.

## 2. De los efectos de la ineficacia

- Frente a la devolución de las **cuotas de administración debidamente indexados**, hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece las sentencias SL 1688 y 1689 de 2019, y teniendo en cuenta: 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos lo ahorrado o se hubiere hecho pagos posteriores a la cotización, no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron y fueron administrados por la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliado la parte demandante en esta, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 y el Fondo de Pensiones debía devolver *“los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”*; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora** hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, porque la CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 se dijo: *“La*

*administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,."*

Como consecuencia de lo anterior, se REVOCARA, la sentencia, en el sentido de ORDENARLE a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a realizar la devolución de las cuotas de administración y sumas adicionales, debidamente indexados.

- Frente al **porcentaje de garantía de pensión mínima**, considera la Sala que **debe ser devuelto** a Colpensiones, teniendo en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a PROTECCIÓN S.A., a la luz de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016, por lo que se ADICIONARÁ la sentencia, ORDENÁNDOLE a la sociedad PROTECCIÓN S.A. a devolver a Colpensiones el porcentaje de garantía de pensión mínima.

### **3. De la devolución de los aportes voluntarios**

En cuanto a la condena impuesta por el A quo de devolver a Colpensiones los aportes voluntarios, conforme el artículo 62 de la Ley 100 de 1993, considera la Sala que no hay lugar a dicha devolución: 1º). Toda vez que la finalidad de estos aportes es para mejorar la mesada pensional a futuro, pero en el régimen del RAIS, sin que aún, se haya autorizado dicho mecanismo para el RPM; 2º) El art. 17 de la Ley 100 de 1993, los prevé, como una facultad no como una obligación, es decir si así lo quiere el afiliado. 3º) La afiliación a los fondos de pensiones voluntarias constituye una contratación aparte, de la afiliación y de la cotización obligatoria; 4º) La administración de los fondos de pensiones voluntarias y de pensiones obligatorias es distinta, pese a estar en el mismo fondo, son en cuentas separadas; 5º) Puede retirarse cuando así lo desee el afiliado; 6º) Ninguna porción va al fondo de solidaridad o fondo pensional de garantía mínima; 7º) Puede ser utilizados para efectos diferentes e incrementar la mesada pensional, como la vivienda, la educación, etc; 8º) Ese negocio financiero no es exclusivo de las AFP, también lo realizan distintas fiduciarias; y por último, de acuerdo al precedente judicial relativo a la declaración de la ineficacia, la CSJ ha señalado cuales son las devoluciones que deben darse y no se incluye el aporte voluntaria. Por lo anterior saldrá avante este punto en la apelación elevada por PROTECCIÓN S.A., por lo que se REVOCARÁ la orden dada a PROTECCIÓN S.A. de devolver estos aportes.

### **4. De la devolución del bono pensional**

En lo que respecta a la orden dada a PROTECCIÓN S.A. de devolver el bono pensional, se debe tener en cuenta que, previo al pago del bono pensional, existen unas etapas que se deben de generar, tal y como son: la emisión, expedición y finalmente la redención, siendo necesario precisar en este caso que, si bien es cierto que la redención normal del mismo sería a los 62 años, ellos es, para el **22 de abril de 2023** al haber nacido el 22 de abril de 1961, no existe prueba en el plenario de la emisión y redención del bono pensional. Y aunado a lo anterior, en el hipotético caso que se hubiere realizado la redención anticipadamente (de lo cual no hay prueba), debe anularse y devolverse a la oficina de bonos pensionales, para realizar el trámite al que haya lugar.

Con fundamento en lo anterior, la orden en mención se REVOCARÁ, para en su lugar indicar que en caso de que el bono pensional haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. en la suma de \$908.526 por no haber salido avante el recurso de apelación interpuesto. Sin costas a Colpensiones por salir avante su recurso.

### DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### RESUELVE:

**PRIMERO: REVOCAR** la sentencia de primera instancia, en el sentido de **ORDENARLE** a la sociedad PROTECCIÓN S.A. la devolución de los gastos de administración, los seguros previsionales, ambos debidamente indexados, y el porcentaje de garantía de pensión mínima, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO: REVOCAR** la orden dada a PROTECCIÓN S.A. de devolver estos aportes voluntarios.

**TERCERO: REVOCAR** la orden dada a PROTECCIÓN S.A. de devolver el bono pensional, para en su lugar indicar, que en caso de que el bono pensional haya sido recibido anticipadamente, se proceda a restituirlo a la oficina de bonos pensionales del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, para que esta entidad proceda con su anulación.

**CUARTO: CONFIRMAR** en todo lo demás, la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

**QUINTO:** Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. en la suma de \$908.526. Sin costas a Colpensiones.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
- SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 013 del 28 de enero de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>